

NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia
JUZGADO : 21º Juzgado Civil de Santiago
CAUSA ROL : C-7373-2020
CARATULADO : MARTÍNEZ/BUSES
METROPOLITANA MET BUS S.A.

Santiago, catorce de Marzo de dos mil veintitrés

VISTO:

A folio 1, comparece Macarena Pizarro Villagrán, abogado, en representación convencional de **SOFÍA ESPERANZA MARTÍNEZ BECKER**, egresada de cuarto medio, ambas domiciliadas para estos efectos en Av. Príncipe de Gales N° 5921 oficina 702, La Reina, quien viene en interponer demanda de indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual en contra de la sociedad **BUSES METROPOLITANA S.A.**, representada legalmente por Juan Pinto Zamorano, de quien ignora mayores antecedentes, ambos con domicilio para estos efectos en Avenida Libertador Bernardo O'Higgins N°4242, Estación Central.

Funda su pretensión en que día 29 de junio de 2016, alrededor de las 07:40 horas, José Antonio Palavecino Quezada conducía el bus del Transantiago del recorrido 516, PPU. FL XP - 41, cuyo propietario es la empresa demandada, por el corredor exclusivo de buses de Av. Grecia en dirección al poniente, frente al Estadio Nacional, comuna de Ñuñoa, lugar en que no atento a las condiciones del tránsito, continúa la marcha del móvil, sin respetar el derecho preferente de paso de su representada quien cruzaba por el paso peatonal debidamente demarcado y señalizado, la calzada del corredor de buses de avenida Grecia en dirección al sur, atropellándola. Afirma que la demandante se dirigía, junto a su hermana menor, Rosario, camino al Colegio Rudolf Steiner, ubicado en la comuna de Peñalolén. Asegura que a consecuencia del atropello, Sofía resultó con lesiones graves e importantes secuelas.

Manifiesta que fue trasladada al Hospital Salvador, para luego ser llevada a la Clínica Las Condes, donde es llevada a la Unidad de Cuidados Intensivos para ser operada, lugar en el que además fue diagnosticada con



el siguiente resultado: TEC complicado; fractura cráneo facial, fractura de base de cráneo y hundimiento frontal, hematoma subdural, contusión hemorrágica, neumoencéfalo, hemorragia subaracnoide y fístula LCR, trauma de tórax; fractura clavícula izquierda, neumomediastino, contusión pulmonar, fracturas costales y arcos posteriores y fractura de pelvis; fractura lateral rama iliopubiana izquierda, fractura anterior alerón sacra izquierda con compromiso sacroiliaca. Dichas dolencias fueron ratificadas en informe N°3059-2016 del Servicio Médico Legal de fecha 23 de diciembre del 2016.

Agrega que las consecuencias del accidente fueron graves, puesto que padeció de lesiones en el cráneo que implicaron cirugías complejas, ya que el lóbulo frontal y el piso del cráneo se encontraba astillado, el cerebro se encontraba desplazado y perdió líquido encéfalo raquídeo, siendo necesaria la introducción de 6 placas para afirmar el cráneo, las cuales deberá tener de por vida. Luego de estar en coma inducido por 12 días, de ser sometida a diversas intervenciones quirúrgicas y recibir numerosos tratamientos médicos, transcurre un mes antes de ser dada de alta, donde se inicia un extenso camino de recuperación, el cual ha involucrado más operaciones, exámenes y tratamientos kinesiológicos, psicológicos y psiquiátricos, debiendo medicarse en forma permanente en función de sus secuelas, las cuales contemplan cicatrices, la pérdida del olfato y el gusto, déficit atencional, pérdida de memoria, migrañas constantes y otras secuelas.

Frente a los hechos relatados, asegura que el conductor del autobús, José Antonio Palavecino Quezada, fue condenado en procedimiento simplificado, como autor de cuasidelito de lesiones graves, cometido el día 29 de junio de 2016, por el 8° Juzgado de Garantía de Santiago en sentencia definitiva de fecha 12 de julio de 2018, en causa RUC 1600617916-2, RIT 10644-2016, la cual se encuentra ejecutoriada.

Prosigue indicando que frente a los daños irreparables causados, procede que la demandada indemnice los perjuicios causados, principiando por el lucro cesante como pérdida de la chance, sosteniendo que la jurisprudencia ha estimado que esta es un concepto que difiere del lucro cesante en el sentido que no se exige acreditar ese grado de probabilidad tan elevado, ya que lo indemnizable no es una pérdida efectiva, sino la



oportunidad o chance de que el ingreso o renta futura se hubiera producido. Cita extensa jurisprudencia en apoyo a sus postulados.

Hace presente, además, que Sofía era una joven de 17 años al momento del accidente, próxima a egresar de 4to medio, y se preparaba para postular y continuar sus estudios universitarios teniendo como preferencia la carrera de medicina, e incluso mantenía la ilusión de postular a universidades en Europa, teniendo promedio 6,4, con buen nivel de idioma alemán e inglés, y además se desempeñaba como garzona para costear el preuniversitario y ahorrar dinero.

En relación a lo anterior, afirma que Sofía ha descartado su sueño de poder estudiar, ya que las secuelas dejadas por el accidente hacen imposible que pueda proyectarse en ese sentido. Sobre dicho punto, señala que los ingresos brutos promedios de las carreras universitarias más tradicionales al primer año de egreso son \$889.752.- y al quinto año alcanzan la suma promedio de \$1.664.243.- Teniendo dicho monto en consideración, estimando que la demandante habría comenzado a ejercer su profesión a los 24 años, y considerando la edad productiva hasta los 60 años, ello importaría un lucro cesante del orden de los \$384.372.864.-

Respecto a la otra partida indemnizatoria, esto es el daño emergente, lo valoriza en la suma de \$105.603.357.- el que comprende tanto el daño emergente presente y futuro. Respecto al daño emergente actual consiste en aquellos egresos en que se incurrió mientras Sofía estaba en los centros hospitalarios, y los que se han producido hasta el día de hoy a consecuencia del atropello, todos los cuales no han sido cubiertos en su totalidad por la isapre a la cual se encuentra afiliada. Enseguida, pormenoriza cuales serían estos gastos: Estacionamiento, combustible y alimentación durante estadía en la Clínica Las Condes por 30 días, donde el valor diario de estacionamiento fue de \$10.000 lo que da un total de \$300.000, el combustible por trayecto diario en razón de 30kms por 30 días en razón de 7 kms/lt con un valor de \$800 c/u, lo que da un valor de \$102.857, y la alimentación en la referida Clínica por un promedio diario \$10.000 da un total de \$300.000 por este concepto. En total de los gastos por los conceptos señalados durante la estadía de Sofía en la Clínica Las Condes suman \$702.857.- Luego contempla las sesiones de kinesiología, donde



encontramos sesiones por la suma de \$50.000 cada una, lo que da un total de \$1.000.000.- Agrega el arriendo de silla de ruedas por la suma de \$100.000.- Suma también la atención psicológica de 10 sesiones por un total de \$200.000.- Añade gastos en medicamentos por la suma total de \$702.000.-, también indica gastos por estacionamiento y combustible por visitas de Sofía a Clínica las Condes para efectuarse exámenes y controles, donde consideran 20 visitas, con un promedio en estacionamiento de \$3.000 diarios lo que da un total de \$60.000 y combustible por un total de \$68.500 en base a 30 kms por 7 kms/lit en razón de \$800 por litro. La suma total por ambos conceptos es de \$128.500.- Finalmente alega el pago efectuado a Preuniversitario Teatral, por la pérdida del 50% de la matrícula y mitad del año, por la suma total de \$500.000.- y luego esgrime la pérdida de un año de Preuniversitario Pedro de Valdivia por la suma de \$1.000.000.- En consecuencia el daño emergente actual asciende a la suma de \$4.383.357.-

Luego, en cuanto al daño emergente futuro, corresponde al gasto que deberá incurrir Sofía hasta el final de sus días, considerando una proyección de vida de 85 años para las mujeres en Chile, considerando los siguientes ítems: Operación de retiro placas cuando empiecen a doler más tratamiento cutáneo por \$2.000.000.- Añade un detector de gases para la casa, cuya vida útil es de 5 años, por los 85 años de expectativa de vida de la demandante en razón de \$100.000.- c/u, nos da la suma de \$1.300.000.- Enseguida agrega los gastos relativos a tratamiento psicológico y psiquiátrico y remedios de por vida, en razón de 2 sesiones al mes por \$25.000.- c/u por 64 años da un total de \$38.400.000.- Considera además remedios psicológicos (sic) futuros de por vida, con un costo de \$30.000 mensual por 64 años = \$23.040.000.- además de tratamientos kinesiológico en razón de 2 sesiones al mes de por vida: $\$20.000 \times 2 \times 12 \text{ meses} \times 64 \text{ años} = \$30.720.000.-$ al igual que tratamiento neurológico para tratar memoria (capacidad para recordar cosas) y déficit atencional: $\$60.000 \times 1 \text{ vez al mes} \times 12 \text{ meses} \times 8 \text{ años (estudios futuros)} = \$5.760.000.-$ En total, los gastos emergentes futuros ascienden a un total de \$101.220.000.-

En cuanto a la última partida indemnizatoria, demanda daño moral, donde luego de señalar consideraciones doctrinarias y jurisprudenciales al respecto, reflexiona sobre los hechos descritos, donde afirma que el



accidente ha provocado un dolor de la mayor magnitud incomprensible e inimaginable, al haber cambiado su vida por completo, generando una incertidumbre en todos los aspectos, viendo truncados los proyectos que tenía a futuro. Seguidamente, inserta un relato que sería escrito personalmente por Sofía, donde relata las consecuencias emocionales de los hechos descritos. En razón de ello, demanda la suma de \$150.000.000.-

Finaliza con las consideraciones jurídicas de lo demandado, expresando que el artículo 698 N°10 del Código de Procedimiento Civil establece el procedimiento sumario para conocer de los juicios en que se deduzcan acciones civiles derivadas de un delito o cuasidelito, lo cual sería el caso de autos, toda vez que se estableció la responsabilidad penal del conductor del autobús, José Antonio Palavecino Quezada, la cual es de carácter solidario con el dueño del vehículo que conducía, en razón de lo previsto en los artículos 2314 y 2329 del Código Civil. Asegura, además, que la legitimación pasiva de la demandada se encuentra regulada en el artículo 169 inciso 2° de la Ley N°18.290, y que se dan todos los presupuestos de la responsabilidad demandada.

Previas citas legales, pide tener por interpuesta demanda de indemnización de perjuicios por responsabilidad civil extracontractual en contra de la demandada ya individualizada, a fin que sea acogida y se le condene a pagar la suma de \$639.976.221.- suma que comprende el lucro cesante como pérdida de una chance por la suma de \$384.372.864, daño emergente por la suma de \$105.603.357, daño moral por la suma de \$150.000.000, sin perjuicio de aquella suma que el Tribunal determine en definitiva, todo ello con reajustes, intereses y costas.

A folio 6, consta notificación personal al representante legal de la parte demandada.

A folio 14, se celebra la audiencia de estilo, con la comparecencia de los apoderados de la parte demandante y demandada. La actora ratifica la demanda en todas sus partes, con costas. Luego, la demandada contesta la demanda mediante minuta escrita de folio 9. Se llamó a las partes a conciliación, sin resultado exitoso.

En cuanto a la contestación de la demanda, la parte demandada pide el rechazo de la misma, argumentando para ello que no es posible



determinar que se ha acreditado la responsabilidad del conductor en los hechos que se denuncian, pues éste asumió su responsabilidad individual con el objeto de adquirir los mencionados beneficios, lo que derivó en su condena, sin pronunciamiento de los hechos en el fondo. En efecto, agrega que la interposición de la acción de responsabilidad por hechos reconocidos por un tercero ajeno al presente juicio, mediante el procedimiento sumario, vulnera sus derechos fundamentales, como lo es la garantía de un debido proceso.

Sin perjuicio de lo antes señalado, de igual forma solicita el completo rechazo de la demanda, puesto que la supuesta responsabilidad que se le imputa en el accidente no sería efectiva, indicando que será materia de prueba que acreditar que el chofer no se encontraba atento a las condiciones de tránsito, lo cual no se podrá tener por establecido en base a las sentencia penal, toda vez que el accidente se produjo por culpa y negligencia de la demandante, quien atravesó el cruce peatonal de manera imprudente, corriendo, sin precaución alguna y sin advertir la presencia del bus, el cual pese a avanzar dentro de los límites de velocidad permitidos no alcanzó a frenar debido al actuar sorpresivo de la actora. Añade que dicha circunstancia fue advertida por Carabineros de la 33° Comisaría de Ñuñoa, quienes consignaron en el parte que la causa del accidente sería la imprudencia del peatón. Inserta los testimonios prestados en la carpeta investigativa del Ministerio Público, los cuales darían cuenta que la culpable del accidente sería la demandante, en razón de su actuar temerario.

Luego, asegura que al encontrarnos frente a la aplicación de un estatuto de responsabilidad estricta –artículo 169 de la Ley de Tránsito– contra el dueño del vehículo, siempre será necesario el cumplimiento de los requisitos de la responsabilidad respecto del chofer, esto es, la culpa del conductor, que se cumple con alguna de las presunciones de responsabilidad establecidas legalmente, o la inexistencia de la responsabilidad de otro, ninguno de los cuales se cumple en autos.

Respecto a los daños solicitados, hace presente respecto al daño emergente que de haberse incurrido en gastos estos no habrían sido solventados por la demandante, a la sazón sus padres, por tanto la pérdida efectiva no se produjo en su patrimonio, por lo que carecería de acción



para demandar. En tal sentido, será carga de la demandante acreditar la efectividad de los gastos, el monto de estos, y que la merma patrimonial se produjo en sus bienes.

Respecto al daño emergente futuro, sostiene que es imposible establecer la certeza absoluta de su existencia, pues para que sea un daño indemnizable este debe ser cierto, determinado, personal y directo, lo cual no acontecería en autos. Cita una sentencia de primera instancia en apoyo a lo señalado.

Hace presente, además, que al momento del accidente, su representada mantenía contratado el seguro obligatorio de daños contra terceros con la empresa CHUBB, número de póliza 43259650, la cual se activó al momento en que la demandante ingresó en el Hospital del Salvador, lo cual cubre los gastos médicos y hospitalarios en que pudo haberse incurrido con ocasión del accidente.

Sobre el lucro cesante, demandado como pérdida de la chance, afirma que la demandante concluye que la oportunidad perdida es la de desarrollarse profesionalmente, frustrándose sus expectativas como consecuencia del accidente, lo cual rebate indicando que para que estemos frente a dicha institución es necesario que exista una expectativa seria y real de haber obtenido un ingreso, lo cual no acontecería en autos pues son muchas las variantes que deben cumplirse para que la demandante percibiera las remuneraciones futuras que demanda como lucro cesante. De lo anterior, en su opinión, podría estimarse que efectivamente se perdió la posibilidad de rendir el examen, pero tampoco existía la posibilidad cierta de ingresar a la universidad, a la carrera deseada, haberla terminado y conseguido trabajo en la fecha indicada.

Subsidiariamente, para el evento que se considere la procedencia del lucro cesante en la forma demandada, solicita la rebaja del monto solicitado, ya que lo que correspondería indemnizar en autos sería la oportunidad perdida y no el daño objetivamente sufrido.

Con ocasión del daño moral, asegura que será carga de la demandante acreditar la efectividad de los supuestos perjuicios reclamados y su monto, y que esta indemnización tiene una finalidad reparar un perjuicio



que debe ser cierto, real y efectivo, no eventual, y que jamás dicho resarcimiento debe tener el carácter de lucrativo.

Finalmente, para el caso en que el Tribunal estime la concurrencia de la responsabilidad de su representada en los hechos imputados en la demanda, solicita en forma subsidiaria que se tenga en consideración el comportamiento negligente de la demandante, aplicando la compensación de culpas contenida en el artículo 2330 del Código Civil, esto es, en la exposición imprudente al riesgo, toda vez que la demandante habría cruzado corriendo por el sector donde tuvo lugar el accidente, sin advertir la presencia cercana de un bus.

A folio 15, acogida parcialmente la reposición a folio 22, y con declaración de la Corte de Apelaciones de Santiago a folio 78, se recibió la causa a prueba.

A folio 31, se reanudó el término probatorio.

A folio 106, se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

I.- EN CUANTO A LAS TACHAS:

PRIMERO: Que, a folio 42, se dedujo tacha en contra de la testigo de la demandante, Francesca Abarca González, fundado en las inhabilidad del artículo 358 N°6 del Código de Procedimiento Civil, esto es, que carece de imparcialidad para declarar en juicio por tener interés directo o indirecto, argumentando que la deponente habría recibido el pago por la realización de evaluaciones psicológicas, siendo contactada directamente por la abogada patrocinante del juicio.

Evacuando el traslado, la parte que presenta al testigo pide su rechazo, toda vez que a través de los dichos de esta no se puede deducir la falta de imparcialidad para testificar, y que fue contactada por su conocimiento en el tema, aclarando que la remuneración que percibió fue por los servicios profesionales realizados, sin que cuente con interés patrimonial en el resultado del juicio.

SEGUNDO: Que, de los dichos del testigo no se infiere que esta tenga un interés patrimonial directo o indirecto en el resultado del juicio, advirtiéndose que la remuneración que haya podido percibir lo fue en razón de sus servicios profesionales como psicóloga. Debe tenerse presente que su



comparecencia resulta útil por cuanto explica y reconoce el contenido del informe de fecha 6 de enero del 2022, de folio 33, y además, del examen de su testimonio, no se advierte una falta de imparcialidad. En razón de ello, se rechazará la tacha interpuesta.

II.- EN CUANTO AL FONDO:

TERCERO: Que, **SOFÍA ESPERANZA MARTÍNEZ BECKER**, viene en interponer demanda de indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual en contra de la sociedad **BUSES METROPOLITANA S.A.**, según se detalló en lo expositivo de la presente sentencia.

CUARTO: Que, legalmente emplazada, la demandada contestó la demanda dirigida en su contra, pidiendo el rechazo de esta.

QUINTO: Que, la demandante rindió la siguiente prueba.

Documental:

A folio 1:

1.- Sentencia definitiva del 8° Juzgado de Garantía de Santiago, de fecha 12 de julio de 2018, en procedimiento simplificado, en causa RUC 1600617916-2, RIT10644-2016, por cuanto se condenó a José Palavecino Quezada en calidad de autor del cuasidelito de lesiones graves, concediéndosele la pena sustitutiva de remisión condicional.

2.- Certificado de Inscripción y Anotaciones vigentes en el Servicio de Registro Civil e Identificación, del bus placa patente FLXP- 41, inscrito a nombre de Buses Metropolitana S.A.

A folio 33:

1.- Documento titulado informe pericial psicológico, emitido por Francesca Abarca González, con fecha 23 de febrero del 2021.

A folio 36:

1.- Documento ofrecido como copia de carpeta investigativa.

2.- Sentencia definitiva del 8° Juzgado de Garantía de Santiago, de fecha 12 de julio de 2018, en procedimiento simplificado, en causa RUC 1600617916-2, RIT10644-2016, por cuanto se condenó a José Palavecino Quezada en calidad de autor del cuasidelito de lesiones graves, concediéndosele la pena sustitutiva de remisión condicional.



3.- Certificado de ejecutoria de fecha 23 de julio de 2018, respecto a la sentencia antes indicada.

4.- Cartolas prestaciones médicas realizadas en Cruz blanca año 2016 a 2020, a nombre de Álvaro Martínez Ramírez, figurando como beneficiaria la demandante.

5.- Cuadro titulado “Resumen total prestaciones Cruz Balnca (sic) Sofía Martínez”

6.- Certificado de fecha 23 de septiembre del 2021, emitido por Patricio Mellado Talesnik, jefe del departamento de Neurología de la Pontificia Universidad Católica de Chile, el cual da cuenta que la demandante *“se encuentra con una disminución significativa de sus capacidades cognitivas, con un síndrome frontal inhibitorio asociado a una pérdida irreversible del olfato (anosmia). Estos dos problemas neurológicos se correlacionan con las secuelas del trauma encefálico observadas en las tomografías computarizadas de encéfalo de julio de 2016”*

7.- Certificado de nacimiento de la demandante.

8.- Certificado de Inscripción y Anotaciones vigentes en el Servicio de Registro Civil e Identificación, del bus placa patente FLXP- 41, inscrito a nombre de Buses Metropolitana S.A.

9.- Certificado promedio de notas de educación media y porcentaje de ubicación de la demandante.

10.- Certificado anual de estudios de primer y segundo medio a nombre de la demandante.

11.- Certificado de alumno regular de la demandante del Preuniversitario Pedro de Valdivia, emitido en diciembre del 2020, por los años 2017 y 2018.

12.- Contrato de trabajo celebrado entre Sur Gastronómico Inversiones SpA y la demandante, con fecha 21 de marzo del 2016.

13.- Electrocardiograma doppler color a nombre de la demandante emitido por la Clínica Las Condes, con fecha 01 de julio del 2016.

14.- Ficha Clínica emitida por Clínica Las Condes a nombre de la demandante.



15.- Informe electroencefalograma emitido por el Laboratorio de Neurofisiología de la Clínica Las Condes, a nombre de la demandante, de fecha 25 de julio de 2016.

16.- Informe médico emitido por la Clínica Las Condes, a nombre de la demandante, de fecha 25 de octubre del 2016.

17.- Informe médico legal N°3059-2016 a nombre de la demandante, emitido por el Servicio Médico Legal con fecha 23 de diciembre del 2016.

18.- Copia de liquidación de sueldo de la demandante de febrero y marzo del 2016.

19.- Artículo de prensa de fecha 10 de diciembre del 2021, emitido por Las Últimas Noticias, titulado “Nuevo ranking: sueldo y empleabilidad de todas las carreras universitarias”

20.- Impresión de pantalla de puntaje obtenido en admisión 2017 y 2019 de la demandante.

21.- Receta emitida a nombre de la demandante, por Karen Alexandrovich Lewin, psiquiatra, que prescribe medicamento “Butrino” de “uso permanente” de fecha 03 de agosto del 2021.

22.- Impresión de pantalla que daría cuenta de pedido 000271251, en Farmacias Ahumada, de fecha 07 de enero del 2022, por la compra del medicamento Butrino, cuyo precio es \$17.895.-

A folio 39:

1.- Documento titulado “Promedio remuneraciones carreras universitarias al 1° año de egreso”

2.- Boleta de honorarios electrónica N°207, emitida por Daniel Zepeda López, a nombre de la demandante, por “ejercicios terapéuticos x 3” y “reeducación de la marcha x 3”, por un total de \$90.000.- de fecha 23 de septiembre del 2016.

3.- Boleta de honorarios electrónica N°198, emitida por Daniel Zepeda López, a nombre de la demandante, por “ejercicios terapéuticos x 10” y “reeducación de la marcha x 10”, por un total de \$300.000.- de fecha 10 de agosto del 2016.

4.- Documento emitido por Soledad Soza Bulnes, medicina física y rehabilitación, de la Clínica Las Condes, a nombre de la demandante, con fecha 27 de julio del 2016.



5.- Boleta N°491919 de fecha 18 de agosto del 2016 emitida por la Clínica Las Condes a nombre de la demandante, por un monto de \$80.158.-

A folio 92:

1.- Certificado de Inscripción y Anotaciones vigentes en el Servicio de Registro Civil e Identificación, del bus placa patente FLXP- 41, inscrito a nombre de Buses Metropolitana S.A.

Testimonial:

A folio 42, comparecen los testigos Francesca Abarca González, Sofía Aranda Ramírez y Bruno Arce Urrea.

Prueba pericial:

A folio 94, evacúa informe el perito Juan Aros Ojeda.

Oficios:

A folio 51, oficio Ord N°06/2367 de fecha 18 de febrero del 2021, del Jefe División Jurídica (S) de la Subsecretaría de Educación Superior del Ministerio de Educación.

SEXTO: Que, la demandada rindió la siguiente prueba:

Documental:

A folio 38:

1.- Parte detenido N° 2894 de fecha 29 de junio de 2016 emitido por la 33° Comisaría de Ñuñoa.

2.- Formulario para toma de datos en accidente de tránsito emitido por la 33°Comisaria de Ñuñoa.

3.- Copia declaración José Antonio Palavecino Quezada de fecha 28 de noviembre de 2016, ante Fiscalía de Ñuñoa.

4. Copia de citación a María Paz Barriga Alarcón de fecha 6 de diciembre de 2016, en casusa RUC 1600617916-2 en calidad de testigo, conjuntamente con copia declaración de fecha 20 de diciembre de 2016, ante Fiscalía de Ñuñoa.

5.- Copia de citación a Rosario de los Ángeles Martínez Becker de fecha 1 de diciembre de 2016, en casusa RUC 1600617916-2 en calidad de testigo, conjuntamente con copia declaración de fecha 20 de diciembre de 2016, ante Fiscalía de Ñuñoa.



6.- Copia de citación a Sujei del Pilar Rivera Sanhueza de fecha 5 de diciembre de 2016, en casusa RUC 1600617916-2 en calidad de testigo.

7.- Copia de declaración de la testigo antes individualizada de fecha 21 de diciembre de 2016, ante Fiscalía de Ñuñoa.

8.- Copia de citación a Cristian Rodrigo Lucero Gallardo de fecha 15 de diciembre de 2016, en casusa RUC 1600617916-2 en calidad de testigo, conjuntamente con copia declaración de fecha 5 de enero de 2017, ante Fiscalía de Ñuñoa.

Oficios:

A folio 44 y 49, oficio proveniente del 8° Juzgado de Garantía de Santiago.

SÉPTIMO: Que, la demandante acciona en procedimiento sumario dentro del artículo 680 N°10 del Código de Procedimiento Civil, esto es, por acciones civiles derivadas de un delito o cuasidelito, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 del Código Procesal Penal y siempre que exista sentencia penal condenatoria ejecutoriada. La acción intentada por la actora corresponde a una indemnización de perjuicios en sede extracontractual, donde persigue el resarcimiento de los perjuicios provocados por un accidente de tránsito, buscando que el dueño del vehículo involucrado en el hecho responda por los daños demandados, todo ello en virtud de la responsabilidad solidaria que establece el artículo 169 de la Ley de Tránsito.

OCTAVO: Que, en dicho sentido, será carga de la demandante acreditar los supuestos de procedencia de la responsabilidad demandada, esto es, la existencia de una acción u omisión, que este haya sido cometido con dolo o culpa, el daño, el nexo de causalidad entre el hecho y el daño, y la capacidad delictual.

NOVENO: Que, en cuanto a la acción u omisión del autor, tenemos por acreditada dicha circunstancia en base a la sentencia penal condenatoria y su certificado de ejecutoria de folio 1 y 36, las cuales establecen: “(...) *El día 29 de Junio de 2016, alrededor de las 07:40 horas, el imputado JOSE ANTONIO PALAVECINO QUEZADA conducía el Bus del Transantiago del recorrido 516, PPU. FL XP - 41, por el corredor exclusivo de buses de Av. Grecia en dirección al poniente, frente al Estadio Nacional, comuna de*



*Ñuñoa, lugar en que no atento a las condiciones del tránsito, reinicia la marcha del móvil, sin respetar el derecho preferente de paso a la víctima SOFIA ESPERANZA MARTÍNEZ BECKER, quien cruzaba, por el paso peatonal debidamente demarcado y señalado, la calzada del corredor de buses de avenida Grecia en dirección al sur, atropellándola. A consecuencia de ello, la víctima SOFÍA ESPERANZA MARTÍNEZ BECKER, resultó con lesiones consistentes en tec Grave; Policontusión; fractura ala sacro izquierda pelvis; fractura craneales esferoide frontales bilaterales; reducción quirúrgica placas frontales; fractura clavícula izquierda; fractura 4ª – 5ª – 6ª costillas izquierda; fractura pelvis iliopubiana; fractura nasal esferoide etmoidal; neumotorax izquierdo derecho; de carácter grave que suelen sanar salvo complicaciones en 179 a 180 días con igual tiempo de incapacidad, secundario a accidente de tránsito, según informe N° 3059-2016 del Servicio Médico Legal. (...) **TERCERO:** Que el imputado admitió responsabilidad en los hechos señalados en el requerimiento, tras dársele a conocer los derechos que le concede la ley. **CUARTO:** Que la defensa del imputado no cuestiona la pretensión punitiva propuesta por el Ministerio Público, solicitando al tribunal se le conceda a su representado la pena sustitutiva de remisión condicional por cumplirse los requisitos legales para ello, petición que no es debatida y que será acogida en los términos que se señalarán en lo resolutivo del fallo.”*

De la lectura anterior, valorando los instrumentos señalados conforme a su naturaleza de instrumento público, podemos tener por establecida la responsabilidad del conductor José Palavecino Quezada en el accidente de tránsito que afectó a la demandante. De igual forma, conforme al certificado de anotaciones vigentes, tenemos que el autobús que conducía, placa patente única FLXP.41-1, figura inscrito a nombre de la demandada, por lo que es dable estimar su responsabilidad solidaria en los hechos demandados, en caso de concurrir todos los requisitos de la responsabilidad que aquí se dilucida.

Si bien la demandada manifestó que en virtud de lo resuelto en procedimiento simplificado, la sede judicial respectiva no habría acreditado la responsabilidad del conductor en los hechos, ello pugna frontalmente con lo asentado en la sentencia antes referida, por lo que no cabe atender sus



alegaciones. A mayor abundamiento, y a fin de despejar cualquier duda, en la carpeta investigativa de folio 36, se acompaña informe técnico pericial, el que si bien se acompaña incompleto, contempla en sus conclusiones “5. *Que, del juicio analítico anteriormente señalado, al Oficial Investigar que suscribe, viene en concluir la siguiente Causa Basal del Accidente Analizado: “El participante (1), reinicia la marcha del móvil, sin respetar el derecho preferente de paso a la peatón (2), prerrogativa a la cual e encuentra obligado por efectuar ésta última, el cruce de la calzada por un paso para peatones demarcado, atropellando el móvil (1) a la peatón (2)”*”

DÉCIMO: Que, respecto a la existencia de culpa o dolo se estima que en base a los antecedentes proporcionados, concurre culpa en los hechos perpetrados por el conductor del vehículo. De igual forma, siendo el conductor demandado mayor de edad, y sin que se haya alegado eximente alguna, se presumirá su plena capacidad delictual.

DÉCIMO PRIMERO: Que, a efectos de determinar la existencia de daño y nexo causal, se hace imperativo establecer la existencia y dimensión del primer elemento. Del análisis de la demanda, tenemos que la actora demandó lucro cesante por pérdida de la chance, por un monto de los \$384.372.864.- Luego demandó daño emergente, presente y futuro, donde por el primer concepto pidió \$4.383.357.-, mientras que por los segundos solicitó \$101.220.000.- Finalmente, pidió se le resarciera el daño moral padecido, estimándolo en una suma de \$150.000.000.-

DÉCIMO SEGUNDO: Que, en cuanto a la primera partida indemnizatoria demandada, debe tenerse presente que “*Que, en este sentido, y como se ha escrito respecto de la pérdida de una chance (..) 16. Tradicionalmente, se opone al daño cierto el daño eventual, meramente hipotético, que no es reparable. Es un daño eventual, por ejemplo, el riesgo de electrocución producto de la instalación de una línea eléctrica sobre una propiedad y los ingresos que la víctima habría recibido en el ejercicio de una carrera que comenzaba a estudiar cuando sobrevino el accidente.*

En tales casos, la reparación se rechaza porque no existe una certeza razonable de que el daño se realizará, o bien, porque tenía muy pocas probabilidades de obtener la ventaja en el futuro de no haberse cometido el hecho ilícito.



17. La pérdida de una chance se encuentra entre estas últimas hipótesis (cuando no se sabe lo que habría ocurrido en el futuro de no haberse cometido el hecho ilícito), esto es, **incide en la frustración de una expectativa de obtener una ganancia o de evitar una pérdida**. Pero, a diferencia del daño eventual, en los casos de pérdida de una oportunidad puede concluirse que efectivamente la víctima tenía oportunidades serias de obtener el beneficio esperado o de evitar el perjuicio, tal como ya se ha mencionado.

18. Como se adelantó, la hipótesis es la de una víctima que tenía oportunidades de obtener un bien aleatorio que estaba en juego (ganar un proceso, recobrar la salud, cerrar un negocio, acceder a una profesión, etc.) y el agente, al cometer el hecho ilícito, destruyó ese potencial de oportunidades (olvidó apelar, no efectuó un examen, omitió certificar un documento, lesionó al postulante, etc.). La víctima en todos estos casos se encontraba inmersa en un proceso que podía arrojarle un beneficio o evitarle una pérdida (tratamiento médico, apelación de una sentencia, preparación de un examen, etc.), y el agente destruyó por completo con su negligencia las chances que la víctima tenía para lograr tal ventaja (...)

20. En todos estos casos, y en lo que dice relación con la determinación del daño, lo relevante no es tanto el resultado final, sino la chance perdida. El daño indemnizable no es la muerte, perder el concurso, no poder ganar el proceso o cobrar la deuda, sino que es la destrucción de la oportunidad de salvar la vida, de obtener sentencia favorable o de poder cobrar la deuda. Por ello, lo relevante es analizar la naturaleza que debe revestir esta chance.

21. En general, se exige que la oportunidad perdida sea real y seria. En esencia, significa que se niega la reparación si existía una baja probabilidad objetiva de obtener el bien en juego: la demanda tenía muy pocas chances de ser acogida; el paciente poquísimas posibilidades de sobrevivir; el caballo estaba lejos de ser favorito; al estudiante, de modesto rendimiento académico, le faltaban exámenes cruciales; etcétera (...).

25. Por otra parte, como en toda hipótesis de responsabilidad civil, la pérdida de una chance exige una comprobación de un acto ilícito y vínculo causal. Este último punto requiere algunas precisiones.



Ante todo, en la materia debe efectuarse una distinción: existe un vínculo causal entre el ilícito y la chance desaparecida, y otro -no comprobable- entre el hecho ilícito y el resultado final. Evidentemente, este último no se probará en estas hipótesis, pues si se llegase a demostrar, entonces lo que procedería no es indemnizar las chances desaparecidas sino el perjuicio completo (la muerte, la agravación de la salud, la pérdida del proceso, la frustración del negocio, etc.).

*En efecto, el vínculo causal relevante se presenta, en este daño, entre la acción ilícita y la chance perdida. En concreto, debe demostrarse que el médico causó la destrucción de chances de sobrevivir del paciente, pero no que le causó la muerte; que la falta profesional generó la pérdida de oportunidades de ganar el proceso, pero no la derrota en el juicio; que el conductor destruyó las posibilidades del postulante de rendir el examen, pero no que lo privó de ser profesional; etc. En el fondo, la pérdida de una chance permite prescindir de la certidumbre de un vínculo causal (aquel que media entre el ilícito y el daño final), pero exige la acreditación cierta de la relación que debe existir de forma inmediata entre tal ilícito y la destrucción de las chances. (Mauricio Tapia, *PÉRDIDA DE UNA OPORTUNIDAD: ¿UN PERJUICIO INDEMNIZABLE EN CHILE?*. Anuario Iberoamericano de Derecho Notarial, años 2015-2016, pág. 237 y ss.)” (Citado en Rol Corte Suprema N°88.733-2021)*

DÉCIMO TERCERO: Que, de lo anterior, y como cita el autor indicado, tenemos que para conceder la reparación de la pérdida de una chance la posibilidad perdida ha de ser real y seria. En el caso de autos, y en base a la prueba rendida, tenemos que la demandada se encontraba próxima a egresar de la enseñanza media, y contaba con calificaciones que habrían facilitado su ingreso a la universidad al estudio de una carrera profesional. Además consta en autos que se encontraba matriculada en un preuniversitario, lo cual sino corrobora que sus planes a futuros eran el ingresar a una casa de estudios.

En base a ello, conviene hacer presente que la demandante pide como monto de la indemnización el ingreso promedio de las carreras más tradicionales de nuestro país, lo cual varía entre la suma de \$889.752.- y \$1.664.243.- entre el primer y quinto año de egreso. A tal respecto, a folio



oficio 51 consta oficio Ord N°06/2367 de fecha 18 de febrero del 2021, del Jefe División Jurídica (S) de la Subsecretaría de Educación Superior del Ministerio de Educación, quien junto con indicar ingresos promedios mensuales de las carreras que allí se indican, enfatiza en que *“es relevante señalar, estos son valores promedios de cohortes específicos de titulados y no pueden plantearse como ingresos futuros o estimados”*

De acuerdo a lo manifestado en la demanda, los planes de la actora eran ingresar a estudiar medicina, sin descartar desarrollar sus estudios en el extranjero. Sin perjuicio de ello, en declaración de la misma demandante, que obra en carpeta investigativa de folio 36, en página 116 del documento, señala que quería estudiar teatro, lo cual difiere enormemente con lo manifestado en la demanda. No habiéndose acompañado documento alguno que diera cuenta de los ingresos esperados al ingresar a dicha carrera y posteriormente titularse de ella, tenemos que el Tribunal carece de medios de prueba que permitan establecer una cifra a entregar por concepto de indemnización, debiendo tenerse además presente que la doctrina ha sostenido, y como fue recogida en un fallo *“Que, en relación a la evaluación del perjuicio por pérdida de una chance, es preciso remitirse a lo que se ha escrito sobre esta materia, (...) CRITERIO GENERAL: SE RE LA OPORTUNIDAD Y NO EL DAÑO FINAL. La doctrina en este sentido es unánime. La oportunidad es lo que se debe indemnizar, y no lo que estaba en juego. (...) Por eso se ha dicho que la indemnización o el valor es parcial, pues nunca debe ser igual a la ventaja esperada o a la pérdida sufrida. Con todo, el valor del daño final no debe desatenderse, ya que servirá de base para el cálculo de la reparación por la pérdida de la chance (Ignacio Javier Ríos Erazo-Rodrigo Pascual Silva Goñi. Responsabilidad Civil por Pérdida de la oportunidad, Editorial Jurídica, reimpresión Primera Edición 2021, pág. 268).”* (ibid. supra)

De lo anterior, tenemos que de todos modos la pretensión indemnizatoria de la demandante, en cuanto al monto, es errada, pues la pérdida de una chance solo busca reparar solo de forma parcial el daño infligido. En tal escenario, esta sentenciadora evaluará prudencialmente su monto como se dirá en el considerando pertinente.



DÉCIMO CUARTO: Que, en cuanto al segundo ítem requerido por la demandante, esto es, el daño emergente, pidió tanto el daño actual como el futuro. Sobre el particular, nuestra Corte Suprema ha sostenido *“Que en relación a los daños actuales y futuros, explica el autor Jaime Fernández Madero que se deduce que la certidumbre del daño debe ser actual pero el perjuicio puede ser futuro...La cuestión se torna explicativamente nítida en el supuesto del lucro cesante, respecto del cual la certeza de que no habrá ganancia, es presente...Por un lado, nos encontramos con la actualidad del hecho que causa daño y por el otro, con la certidumbre del perjuicio como consecuencia necesaria de la conducta actual... En consecuencia, concluimos que el daño actual es el perjuicio ya operado y subsistente en el patrimonio del damnificado al momento del pronunciamiento judicial. En tanto que el futuro, es aquel que todavía no se ha producido pero que ciertamente existirá luego de la sentencia. (Derecho de Daños. Nuevos Aspectos Doctrinarios y Jurisprudenciales. Editorial La Ley S.A. Buenos Aires, 2002, páginas 49 y 50).*

Tratándose de un daño futuro y su certeza, en la doctrina nacional se ha dicho que la cuestión está íntimamente relacionada con la existencia de una causa que conduzca lógica y razonablemente a un resultado (el daño). Entendemos que es cierto el daño que, conforme a las leyes de la causalidad, sobrevendrá razonablemente en condiciones normales, a partir de su antecedente causal. Por consiguiente, al ejecutarse el acto dañoso puede preverse que éste producirá efectos en el tiempo si subsisten las condiciones entonces imperantes. Resulta obvio que entre la realización del hecho que sirve de antecedente al daño y su consumación pueden aparecer una multitud de factores inesperados o imprevistos que hagan desaparecer los efectos nocivos del acto. Pero estos factores sólo pueden ser considerados en el evento de que razonablemente al momento de ejecutarse el hecho dañoso, ellos están presentes. (Pablo Rodríguez Grez, Responsabilidad Extracontractual, Editorial Jurídica de Chile, 1999, pág. 265).” (Rol Corte Suprema N°22.041-2019)

Sin perjuicio que habiéndose establecido la efectividad del accidente automovilístico, y en principio la concurrencia de una pérdida de la chance, lo cierto es que ello no releva a la demandante de la carga de acreditar o



entregar elementos de convicción que permitan establecer la efectiva existencia del daño emergente, el cual por antonomasia dice relación con un empobrecimiento real y efectivo del patrimonio de una persona. En tal sentido, tenemos que las pretensiones de la actora distan de lo que ella misma ofrece acreditar mediante la prueba rendida, puesto que respecto al daño emergente actual señala gastos en que habría incurrido para estacionamiento, combustible y alimentación durante la estadía en la Clínica Las Condes por 30 días, y además de aquellos gastos en que habría solventado cada vez que asistía a controles, sin acompañar documento alguno que dé cuenta de la efectividad de dicho gasto, o al menos alguno que haga presumir el monto demandado al respecto. Lo mismo sucede con el arriendo de silla de ruedas, cuyo monto es imposible determinar puesto que no se rindió prueba al respecto. Respecto a los pagos efectuados a preuniversitarios, este Tribunal estima que debieron ser contemplados como antecedentes al momento de haber demandado el daño producido por la pérdida de la chance, más que un empobrecimiento a consecuencia del accidente de tránsito.

Ahora bien, en cuanto a lo solicitado como daño emergente actual por los gastos incurridos en kinesiólogo y psicólogo, tenemos que solo se acompañan antecedentes respecto a los gastos incurridos en kinesiólogo, mediante boletas electrónicas de folio 39, N°207, emitida por Daniel Zepeda López, por “ejercicios terapéuticos x 3” y “reeducación de la marcha x 3”, por un total de \$90.000.- de fecha 23 de septiembre del 2016, y boleta N°198, emitida por el mismo tratante, por “ejercicios terapéuticos x 10” y “reeducación de la marcha x 10”, por un total de \$300.000.- de fecha 10 de agosto del 2016. Por lo anterior, es que por concepto de daño emergente solo se podrá conceder la suma de \$390.000.- sin perjuicio de lo que se dirá más adelante.

En cuanto al daño emergente futuro, se incurre en el yerro ya anunciado, por cuanto la demandante no proporciona elementos probatorios que permitirían tener un parámetro para determinar el monto a entregar por concepto de indemnización, toda vez que dice relación con cuestiones precisas, como intervenciones quirúrgicas, aparatos y tratamientos médicos. Si bien se demanda “remedios psicológicos” los cuales tendrían un



carácter de por vida, valorizándolos en razón de \$30.000.- mensuales, lo cierto es que el único antecedente que se acompaña al respecto es la receta de un medicamento denominado “Butrino”, más una boleta que daría cuenta de su valor de \$17.895.-, lo cual es diverso a lo planteado por la demandante. Además lo único que haría presumir que se trata de un medicamento prescrito para algún tipo de afección psicológica es el hecho que la receta aparece extendida por un médico psiquiatra. En dicho planteamiento, habría resultado útil un certificado médico extendido por dicha facultativa, entregando información al Tribunal sobre la razón de la prescripción de dicho medicamento, a ver si ello se vincula causalmente con el accidente que motiva la presente demanda. Ante la falta de dichos antecedentes, cabe el rechazo de la pretensión de daño emergente futuro.

Se observa, sin perjuicio de lo ya señalado, que se acompañó prueba respecto a los gastos cubiertos por la Isapre de la demandante, y otras boletas respecto a exámenes médicos, sin que tales gastos figuren expresamente demandados, o como justificativos de alguna de las partidas indemnizatorias, por lo que no fueron tomados en cuenta para la decisión.

DÉCIMO QUINTO: Que, en cuanto al daño moral, si bien este es de difícil prueba, lo cierto es que en autos existen antecedentes que permitirían hacer lugar a lo allí solicitado. En efecto, a folio 33 consta el documento denominado informe pericial psicológico, el que no puede ser valorado como peritaje en razón de no haber sido producido conforme a las reglas de la prueba pericial, pero si puede ser valorado según su naturaleza de instrumento privado reconocido por la parte de la cual emanó, ya que en autos compareció como testigo la psicóloga Francesca Abarca González, quien reconoció tal documento. Dicho instrumento afirma que la demandante *“se identificó un Trastorno por Estrés Postraumático, el cual va acompañado de Sintomatología Mixta Depresiva – Ansiosa, lo cual genera un Daño Emocional significativo en la peritada y que tiene directa relación con el accidente que ocurre con fecha 29 de junio de 2016.”*

A folio 36, consta el informe del Servicio Médico Legal, el cual si bien da cuenta de dolencias físicas, estas sin duda repercuten en el fuero interno de la demandante. Dicho instrumento señala como conclusión que la actora padece de *“Lesiones de pronóstico grave que suelen sanar salvo*



complicaciones en 179 a 180 días con igual tiempo de incapacidad. Secundario a accidente de tránsito.

Finamente, a folio 94, se evacuó informe pericial por Juan Aros Ojeda, perito en neurocirugía, quién concluye que la demandante “(...) *sufrió el 29 de junio del 2016, un atropello por un bus PP FLXP41, quien la impacta en un cruce peatonal por el lado izquierdo de la afectada, generando un Politraumatismo de Alta Energía, que comprende lesiones Cráneo-cerebrales, Pulmonares, Oseas y Tejidos blandos, que fueron tratadas oportuna y exitosamente en Clínica Las Condes y que le han generado aparte del daño inicial, una serie de Secuelas que van desde lo Psicológico hasta lesiones graves de Nervios Craneales que la dejan sin Olfato y si Sentido del Gusto que entorpecen a perpetuidad su vida diaria y además siendo este hecho el mas grave como Secuela un Trastorno Orgánico y Funcional de los lóbulos frontales, expresado como un Síndrome Frontal-Orbitario, que le genera alteraciones graves de la vida diaria en los ámbitos Cognitivos, de Memoria, de Capacidad Ejecutiva, de Manejo de la emociones, que no solo este daño secuelar es perpetuo sino que además puede conllevar el riesgo de manifestar a temprana edad un cuadro Demencial. Todo lo señalado es sin lugar a duda, consecuencia directa del atropello ya mencionado”*

Como puede advertirse de los informes antes enunciados, todos concluyen en una serie de daños o consecuencias adversas producidas a raíz del accidente de tránsito de autos, los cuales si bien dan cuenta de dolencias físicas, estas sin duda producen un impacto considerable en los sentimientos, estado anímico y fuero interno de la demandante, todo lo cual se ve corroborado por la testimonial de folio 42, por lo que corresponde hacer lugar al daño moral demandado.

DÉCIMO SEXTO: Que, con lo que se ha venido diciendo, y sin perjuicio de los reparos efectuados al daño emergente, en términos generales se ha logrado acreditar dicho elemento de la responsabilidad, por lo que también es dable tener por concurrente el nexo causal o relación de causalidad entre el hecho que produce daño y este último, ya que suprimido metal e hipotéticamente el atropello del cual fue víctima la demandante, desaparecen las consecuencias a que se han hecho referencia.



DÉCIMO SÉPTIMO: Que, en cuanto a la fijación del monto a condenar a la demandada, debe recordarse que se concedió indemnización por la pérdida de la chance, daño emergente actual y daño moral. Sin perjuicio de ello, debe tenerse presente que el artículo 2330 del Código Civil establece que “*La apreciación del daño está sujeta a reducción, si el que lo ha sufrido se expuso a él imprudentemente*” conocido también como la exposición imprudente al riesgo. En relación a ello, a folio 38, se contienen declaraciones prestadas por María Paz Barriga Alarcón, Rosario de los Ángeles Martínez Becker, Sujei del Pilar Rivera Sanhueza y Cristian Rodrigo Lucero Gallardo, de fechas 20 y 21 de diciembre del 2016 y 5 de enero del 2017, respectivamente, ante la Fiscalía de Ñuñoa, quienes manifiestan que la demandante habría cruzado mal por el cruce peatonal donde tuvo lugar el accidente, que al parecer no habría visto al chofer, indicando que la demandante no parecía estar parada en el lugar para cruzar antes del golpe, y finalmente que no se habrían percatado de la presencia el bus.

Los relatos anteriores, emitidos por los sujetos antes indicados, constan en declaraciones prestadas ante la Fiscalía de Ñuñoa, dentro del contexto de la causa RUC N°1600617916-2, esto es la carpeta investigativa de los autos del 8° Juzgado de Garantía de Santiago en donde se impuso la condena al chofer del autobús que produjo el accidente que motiva la presente demanda. Si bien dichos testimonios no han sido prestados en estos autos según las formalidades prescritas para la prueba de testigos, lo cierto es que tampoco puede desatenderse lo contenido en dichos documentos, los cuales a juicio de este Tribunal gozan de la gravedad, oprecisión y concordancia necesarias para presumir que la actora se expuso de forma imprudente al riesgo. Debe considerarse, además, que una de las testigos antes mencionada es la hermana de la víctima, quien presencié el hecho al igual que los otros testigos –salvo el último de ellos quien fue el carabinero de turno que se dirigió al lugar en que tuvo ocurrencia los hechos– por lo que cabe la aplicación de lo previsto en el artículo 2330 antes citado.

En razón de ello, se estima avaluar lo otorgado a la demandante teniendo en consideración la regla anterior, por lo que se condenará a la demandada al pago de una suma de \$7.000.000.- por concepto de pérdida



de la chance, \$300.000.- por daño emergente actual, y \$35.000.000.- por concepto de daño moral, según se dirá en lo resolutivo.

DÉCIMO OCTAVO: Que, las sumas anteriores se deberán pagar con intereses y reajustes, los que se devengarán desde la época de notificación de la demanda hasta su pago efectivo, y por la variación que experimente el I.P.C. entre la fecha de la notificación de la demanda hasta la de su pago efectivo, respectivamente.

DÉCIMO NOVENO: Que, la demás prueba enunciada más no valorada en particular en nada altera lo que viene decidido.

VIGÉSIMO: Que, no habiendo resultado totalmente vencida la demandada, cada parte soportará sus costas.

Y VISTO, lo dispuesto en los artículos 1698 y siguientes, 2314, 2330 del Código Civil, artículos 144, 160, 170, 341,342, 346, 356, 409, 426, 680 y siguientes, todos del Código de Procedimiento Civil, y 169 de la Ley de Tránsito, se declara:

I.- Que, **SE RECHAZA** la tacha deducida en folio 42.

II.- Que, **SE ACOGE PARCIALMENTE** la demanda, condenándose a la demandada únicamente al pago de la suma de \$42.300.000.- (cuarenta y dos millones trescientos mil pesos) por los conceptos y en la forma desglosada en el considerando décimo séptimo, más los intereses y reajustes referidos en el basamento décimo octavo.

III.- Que, **CADA PARTE** soportará sus costas.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

C-7373-2020

Dictada por **doña PATRICIA ILSE CASTRO PARDO**, Juez **Titular**. Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. en **Santiago, catorce de Marzo de dos mil veintitrés**



